



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

P.R.A. 16/2015⁴¹
FORMA A.

PROCEDIMIENTO DE
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA NÚMERO:
16/2015.

SERVIDOR PÚBLICO
INVOLUCRADO:

Ciudad de México. Acuerdo del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veintiuno de junio de dos mil dieciséis.

VISTOS; para emitir resolución en el procedimiento de responsabilidad administrativa número 16/2015; y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Queja. Mediante comparecencia de veintisiete de abril de dos mil quince, _____, adscrita a la _____ del Alto Tribunal, formuló una queja en contra de _____; servidor público adscrito a la Secretaría General de Acuerdos con el cargo de profesional operativo, a quien acusó de que, un martes o miércoles del mes de agosto de dos mil catorce, sin poder precisar la fecha exacta, la abordó cuando salía del área de _____ y se dirigía a comer, para entregarle en su mano una nota doblada dirigida a ella, aparente escrita por el servidor público mencionado, en virtud de la cual le realizó una propuesta de índole sexual.

Con motivo de ello, atendiendo a que los hechos denunciados podían constituir, en principio, la

P.R.A. 16/2015

configuración de una conducta de acoso sexual, mediante proveído de cuatro de mayo de dos mil quince, se radicó la queja con el número **16/2015-ALS**, a fin de que se realizara el análisis y estudio de los hechos respectivos (fojas 1 a 3).

SEGUNDO. Inicio del procedimiento. Mediante proveído de fecha veintidós de mayo de dos mil quince, el Contralor de la Suprema Corte, sobre la base de la suficiencia de los elementos aportados, determinó que existían elementos para concluir que las manifestaciones de índole sexual, presuntamente hechas por

en la nota que entregó a la quejosa, implicaron una agresión y un posible menoscabo a su integridad psíquica y moral y, por ende, a su dignidad, al invadir su intimidad y privacidad, pues tal hecho representó una conducta de carácter sexual ofensiva que tuvo lugar dentro de las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando estas personas ejercen sus funciones como servidores públicos. Por lo tanto, estimó que la actuación del servidor público involucrado se podría ubicar en la causa de responsabilidad administrativa prevista en el artículo 131, elaboración fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por incumplir con la obligación prevista en la fracción VI del artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, es decir, por no guardar buena conducta ni conducirse con respeto hacia las personas con las que se relaciona con motivo de su trabajo. En razón de lo anterior, ordenó tramitar el **inicio del procedimiento de**



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

responsabilidad administrativa en contra del servidor público mencionado (fojas 10 a 18).

Lo anterior, no obstante que inicialmente se hubiera tramitado la queja por una conducta de posible acoso sexual.

Además, en el proveído antes señalado se requirió a [REDACTED] para que en un término de cinco días hábiles formulara su informe por escrito sobre todos y cada uno de los hechos que se le imputaban. El acuerdo de referencia le fue notificado personalmente el veintisiete de mayo de dos mil quince (foja 19).

TERCERO. Informe de defensas. Por acuerdo de doce de junio de dos mil quince, el Contralor de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo por recibido el escrito de fecha cuatro de ese mismo mes y año, suscrito por [REDACTED], mediante el cual formuló su informe de defensas, sin ofrecer pruebas en su favor (fojas 20 a 29).

CUARTO. Cierre de instrucción. Por acuerdo de veinte de abril de dos mil dieciséis, el Contralor de este Alto Tribunal declaró cerrada la instrucción, en términos de los artículos 39, segundo párrafo, del Acuerdo General Plenario 9/2005 y 30, fracción XII, del Reglamento Orgánico en Materia de Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ordenó la emisión del dictamen respectivo (foja 924 del expediente principal).

P.R.A. 16/2015

SEXTO. Dictamen de la Contraloría. El veintidós de abril de dos mil dieciséis, el Contralor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió el dictamen correspondiente (fojas 926 a 939), al tenor de los siguientes puntos resolutivos:

“**PRIMERO.** Se estima que _____ es responsable de la infracción administrativa materia de este procedimiento, conforme a lo expuesto en los considerandos tercero y cuarto del presente dictamen.

SEGUNDO. Se propone sancionar a _____ con **apercibimiento público**, de acuerdo con lo señalado en el considerando quinto de este dictamen.”

Las consideraciones en que se apoyó dicho dictamen se sustentan, en esencia, en que el servidor público involucrado incumplió con su obligación de guardar buena conducta y conducirse con respeto hacia las personas con las que se relaciona con motivo de su trabajo, ya que realizó proposiciones de índole sexual a otra servidora pública de este Alto Tribunal, lo que trajo como consecuencia que faltara al respeto y rectitud que debe imperar en su relación con otros servidores públicos, de tal manera que resulta importante evitar la afectación al bien jurídico que salvaguarda el cumplimiento de la obligación referida.

SÉPTIMO. Trámite del dictamen. El dictamen aludido, inserto al expediente del procedimiento de responsabilidad administrativa número **16/2015** en que se actúa, se remitió al Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que conociera y resolviera el asunto, en términos del artículo 133, fracción



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

P.R.A. 16/2015 04
FORMA A

II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación
(foja 938 vuelta).

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. El Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver en definitiva el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14, fracciones VII y XXIII¹, y 133, fracción II², de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con lo dispuesto en los artículos 23³ y 25, segundo párrafo⁴, del Acuerdo Plenario 9/2005, de veintiocho de marzo de dos mil cinco; en tanto se trata de un servidor público de este Alto Tribunal al que se le atribuye una conducta infractora que no está expresamente catalogada como grave, ni se considera como tal en el caso concreto.

SEGUNDO. Análisis de la conducta atribuida al servidor público. Cabe precisar, en primer término, que la calidad de servidor público de

se acredita con la copia certificada de su nombramiento definitivo como profesional operativo, adscrito a la Secretaría General de Acuerdos, con efectos

¹ ARTÍCULO 14. Son atribuciones del presidente de la Suprema Corte de Justicia:
[...]

VII. Recibir, tramitar y, en su caso resolver, las quejas administrativas que se presenten con motivo de las faltas que ocurran en el despacho de los negocios de la competencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, de alguna de las Salas o de los órganos administrativos de la Suprema Corte de Justicia, en términos del Título Octavo de esta ley;
[...]

XXIII. Las demás que le confieran las leyes, reglamentos interiores y acuerdos generales.

² ARTÍCULO 133. Serán competentes para conocer de las responsabilidades de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, así como para aplicar las sanciones a que se refiere el artículo 135 de esta ley: [...] II. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, tratándose de servidores públicos de este órgano, en los casos no comprendidos en la fracción anterior;

³ Artículo 23. Son competentes para investigar y conocer de los procedimientos relacionados con las responsabilidades administrativas de los servidores públicos regulados por este Acuerdo, el Pleno, el Presidente y la Contraloría.

⁴ Artículo 25. [...] El propio Presidente emitirá la resolución que ponga fin a los procedimientos diversos a los señalados en el citado artículo 24.

a partir del uno de abril de dos mil trece (foja 66), documental que tiene valor probatorio pleno en términos de lo previsto en los artículos 93, fracción II⁵, 129⁶, 197⁷ y 202⁸ del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme a lo dispuesto en los diversos 4⁹ del Acuerdo General Plenario 9/2005 y 47¹⁰ de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, por tratarse de un documento expedido por una servidora pública en ejercicio de las facultades que la norma aplicable le otorga.

Así, al estar acreditado que a

se le confirió cargo como servidor público de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es posible confirmar que debía cumplir con las obligaciones que la normativa exige a todos los servidores públicos, entre ella

⁵ Artículo 93.- La ley reconoce como medios de prueba:

(...)

II.- Los documentos públicos;

(...)

⁶ Artículo 129. Son documentos públicos aquellos cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a un funcionario público revestido de la fe pública, y los expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones.

La calidad de públicos se demuestra por la existencia regular, sobre los documentos, de los sellos, firmas u otros signos exteriores que, en su caso, prevengan las leyes.

⁷ Artículo 197. El tribunal goza de la más amplia libertad para hacer el análisis de las pruebas rendidas; para determinar el valor de las mismas, unas enfrente de las otras, y para fijar el resultado final de dicha valuación contradictoria; a no ser que la ley fije las reglas para hacer esta valuación, observando, sin embargo, respecto de cada especie de prueba, lo dispuesto en este capítulo.

⁸ Artículo 202. Los documentos públicos hacen prueba plena de los hechos legalmente afirmados por la autoridad de que aquéllos procedan; pero, si en ellos se contienen declaraciones de verdad o manifestaciones de hechos de particulares, los documentos sólo prueban plenamente que, ante la autoridad que los expidió, se hicieron tales declaraciones o manifestaciones; pero no prueban la verdad de lo declarado o manifestado.

Las declaraciones o manifestaciones de que se trata prueban plenamente contra quienes las hicieron o asistieron al acto en que fueron hechas, y se manifestaron conformes con ellas. Pierden su valor en el caso de que judicialmente se declare su simulación. También harán prueba plena las certificaciones judiciales o notariales de las constancias de los libros parroquiales, relativos a las actas del estado civil de las personas, siempre que se refieran a época anterior al establecimiento del Registro Civil. Igual prueba harán cuando no existan los libros del registro, original y duplicado, y cuando, existiendo, estén rotas o borradas las hojas en que se encontraba el acta. En caso de estar contradicho su contenido por otras pruebas, su valor queda a la libre apreciación del tribunal.

⁹ Artículo 4. Para la substanciación y resolución de los procedimientos previstos en este Acuerdo serán aplicables la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y, en lo que no se oponga a lo dispuesto en esta última, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. En su caso, será aplicable supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles y, en su defecto, deberá acudir a los principios generales de derecho, en términos de lo previsto en el artículo 14, párrafo cuarto, de la Constitución General de la República, salvo por lo que se refiere a las causas de responsabilidad y sanciones aplicables.

¹⁰ Artículo 47. En todas las cuestiones relativas al procedimiento no previstas en los Títulos Segundo y Tercero de la Ley, así como en la apreciación de las pruebas, se observarán las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

la de observar buena conducta y conducirse con respecto hacia las personas con las que se relaciona con motivo de su encargo.

Ahora bien, del auto que dio inicio al presente procedimiento de responsabilidad administrativa se advierte que la conducta que se le atribuye al servidor público involucrado en el cargo de profesional operativo, adscrito a la Secretaría General de Acuerdos de este Máximo Tribunal, es la prevista en el artículo 131, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por incumplir con la obligación impuesta en el diverso numeral 8, fracción VI, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Concretamente se le atribuye incumplir su obligación de observar buena conducta, tratando con respeto a las personas con quienes tiene relación con motivo del empleo que desempeña, particularmente, por haberle entregado una nota a la quejosa, dentro de las instalaciones de este Alto Tribunal, en virtud de la cual, con un lenguaje soez, le hace una propuesta de índole sexual.

Para definir si la conducta mencionada configura la causa de responsabilidad que se le imputa al servidor público involucrado, es necesario primero traer a cuenta el contenido del marco normativo relevante aplicable al presente caso, que se desprende de los siguientes artículos:

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

“Artículo 131. Serán causas de responsabilidad para los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación:

(...)

XI. Las previstas en el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, siempre que no fueren contrarias a la naturaleza de la función jurisdiccional”.

**Ley Federal de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos**

“Artículo 8. Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones:

(...)

VI. Observar buena conducta en su empleo, cargo o comisión, tratando con respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud a las personas con las que tenga relación con motivo de éste”.

En lo que importa, de lo dispuesto en los artículos transcritos se desprende que una de las obligaciones a cargo de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación es observar buena conducta, tratando con respeto a las personas con las que tenga relación con motivo de su encargo.

El núcleo original del contenido de esa obligación reside en uno de los principios básicos sobre los que descansa el régimen laboral en nuestro orden constitucional, que es el de **respeto a la dignidad humana**¹¹ que conlleva, en una de sus dimensiones, la salvaguarda de la integridad física y psíquica de la persona (trabajador) así como el aseguramiento en la realización de otras libertades.

La esencia de ese contenido puede verse corroborada, por ejemplo, a partir de lo dispuesto en el Código de Ética del Poder Judicial de la Federación, que en su capítulo V,

¹¹ 1o., 3o., 4o., 6o., 13, 25, 27, 31, fracción IV y 123, constitucionales.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

numeral 5.10, se indica que una de las virtudes que se debe tener es la del "respeto" y considera que actuar con base en él implica abstenerse de lesionar los derechos y la dignidad de las personas.

Junto a esa referencia, otra fuente normativa que permite ubicar el concepto de "respeto" para los efectos del caso, lo constituye el Código de Ética de los Servidores Públicos de la Administración Pública Federal¹². A través de este documento se establecieron reglas para que predomine una conducta digna en la actuación de los servidores públicos. Como parte de estas reglas se hace referencia al "respeto", el cual se define de la siguiente manera:

"RESPETO

El servidor público debe dar a las personas un trato digno, cortés, cordial y tolerante.

Está obligado a reconocer y considerar en todo momento los derechos, libertades y cualidades inherentes a la condición humana"

De lo anterior, puede desprenderse con mayor claridad en qué consiste la obligación de respeto que debe guardar todo servidor público en el ejercicio de sus funciones cuando se relaciona con otras personas. Tiene el deber de ser cortés, cordial, tolerante y dispensar un trato digno a los demás, así como reconocer y considerar sus derechos y libertades al momento de relacionarse con ellos. Cabe mencionar que esta disposición, aún y cuando se refiere a la administración pública federal y no es vinculante para la judicatura, es útil en el presente caso para ilustrar lo que se pretende, pues deriva de la regulación del mismo ordenamiento que contiene la

¹² Publicado en el Diario Oficial de la Federación el día treinta y uno de julio de dos mil dos.

infracción que se le reprocha al servidor público involucrado.

Ahora, también resulta de utilidad acudir a otras disposiciones similares que rigen en otras latitudes, como parte de un ejercicio de análisis de derecho comparado. Estas referencias pueden proporcionar algunos elementos que permitan comprender de qué manera se entiende la obligación de los servidores públicos de conducirse de manera respetuosa hacia las personas.

En este sentido, en el ámbito de la Unión Europea¹³, en el año dos mil, el Parlamento Europeo dio a conocer la Guía de Obligaciones de los Funcionarios y Agentes del Parlamento Europeo, en cuyo capítulo II, inciso D)¹⁴, se indica lo siguiente:

"II. OBLIGACIONES DEL SERVICIO

(...)

D) Deber de respeto a los demás funcionarios o agentes:

1. En el servicio, el funcionario o agente no debe en ningún caso atentar contra la dignidad de sus colegas o colaboradores con un comportamiento impropio o mediante expresiones agresivas o difamatorias. Estos comportamientos o expresiones podrán ser objeto de sanción disciplinaria.

2. El funcionario o agente debe además mostrarse respetuoso de las personas, tanto ante sus jefes, como frente a sus colegas o subordinados. No se pueden tolerar en ningún caso actitudes que demuestren una falta total de respeto, como la negativa a ejecutar instrucciones recibidas, a prestar colaboración o asistencia a un colega sobrecargado o presentarse en el servicio en un estado incompatible con la dignidad del ejercicio de las funciones".

¹³ La Unión Europea es una organización supranacional en la cual se encuentran integrados veintiocho Estados europeos, entre ellos: Alemania, España, Francia, Reino Unido, entre otros; la cual cuenta con diversos órganos administrativos como la Comisión Europea, y un órgano legislativo: El Parlamento Europeo.

¹⁴ Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 97, del cinco de abril de dos mil, página 9.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN



De lo anterior se observa que, como parte de una obligación de respeto, en el Parlamento Europeo los funcionarios (servidores públicos) deben evitar toda clase de comportamientos y expresiones agresivas o difamatorias que puedan atentar contra la dignidad de sus jefes, compañeros o subordinados. Incluso, se establecen tres supuestos en los que, en caso de darse, la falta de respeto sería intolerable.

Además, existe un Código Europeo de Buena Conducta Administrativa. En dicho ordenamiento se expresa que todo funcionario debe ser diligente, correcto, cortés, accesible y servicial en las relaciones que mantenga con el público.¹⁵

De las mencionadas disposiciones de derecho comparado, se pueden tomar ciertos parámetros que permitan establecer la manera en que un servidor público de la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe actuar para garantizar el respeto hacia los demás.

Por otra parte, el derecho humano a un ambiente laboral digno ha sido reconocido también en otros instrumentos internacionales de los que México es parte como el Convenio 155 sobre Seguridad y Salud de los Trabajadores¹⁶ de la Organización Internacional del Trabajo. Asimismo, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, órgano encargado de supervisar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y

¹⁵ Defensor del Pueblo Europeo (2005). Código Europeo de Buena Conducta Administrativa. Luxemburgo: Oficina de Publicaciones Especiales de las Comunidades Europeas, página 14.

¹⁶ El 22 de junio de 1981, la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, de la que México fue parte, adoptó en la ciudad de Ginebra, Suiza, el Convenio sobre Seguridad y Salud de los Trabajadores y Medio Ambiente de Trabajo, dicho instrumento fue ratificado por México el 1 de febrero de 1984.

Culturales, emitió la Observación General Número 18 relativa al derecho al trabajo, en la que precisó:

"2. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales proclama el derecho al trabajo en un sentido general en su artículo 6 y desarrolla explícitamente la dimensión individual del derecho al trabajo mediante el reconocimiento, en el artículo 7, del derecho de toda persona a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias, en especial la seguridad de las condiciones de trabajo". (...)

7. El trabajo, según reza el artículo 6 del Pacto, debe ser un trabajo digno. Éste es el trabajo que respeta los derechos fundamentales de la persona humana, así como los derechos de los trabajadores en lo relativo a condiciones de seguridad laboral y remuneración. También ofrece una renta que permite a los trabajadores vivir y asegurar la vida de sus familias, tal como se subraya en el artículo 7 del Pacto. Estos derechos fundamentales también incluyen el respeto a la integridad física y mental del trabajador en el ejercicio de su empleo".



Conforme a los instrumentos internacionales en mención, el derecho a un ambiente laboral sano no sólo se limita a las óptimas condiciones laborales de seguridad e higiene relacionadas con la maquinaria, instrumentos de trabajo, actividades propias del trabajador y ambiente libre de contaminantes; sino que también se deben tomar en cuenta las condiciones relacionadas con cualquier afectación de índole físico o psicológico derivada del trato que reciben de su empleador y de los demás trabajadores que se desempeñan en la misma fuente de trabajo, lo que guarda estrecha relación con el ambiente de trabajo libre de violencia.

En el contexto normativo nacional, el derecho humano al trabajo digno se encuentra reconocido en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que implica que los trabajadores desempeñen sus labores en un ambiente donde



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN



prevalezca el reconocimiento a su dignidad humana y, en consecuencia, al resto de sus derechos.

Así, se obtiene que para considerar que un servidor público se conduce con respeto hacia los demás, se le debe exigir que en las relaciones que con motivo del empleo, cargo o comisión que detente mantenga con sus jefes, colaboradores, compañeros de trabajo, subordinados y con toda persona con la que tenga relación derivado de las funciones que tiene encomendadas, así como ciudadanos en general; les otorgue un trato digno, cortés, diligente y correcto, además de que observe los derechos y libertades de las demás personas. Además, el servidor público deberá abstenerse de atentar contra la dignidad de las personas con un comportamiento impropio o mediante expresiones agresivas o difamatorias.

Estos aspectos son lo mínimo a lo que se encuentra obligado un servidor público del más Alto Tribunal del país en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, ya que con su comportamiento refleja hacia el exterior (es decir, respecto de las personas con las que se relaciona con motivo de su empleo) los principios rectores de esta institución. Por ello, una conducta que no sea acorde a lo anterior, no atendería a los estándares más exigentes que deben prevalecer en la Suprema Corte en este aspecto. Si el servidor no actúa conforme a esas reglas de comportamiento, entonces no trataría con respeto a los demás, lo que a su vez acarrearía como consecuencia, el incumplimiento a la obligación de observar buena conducta.

Sentado lo anterior y teniendo claro en qué consiste la obligación de los servidores públicos de observar buena conducta y conducirse con respeto hacia las personas con las que se relaciona, ahora resulta necesario analizar la existencia de los hechos materia de este procedimiento y si éstos constituyen una contravención a la obligación antes mencionada. A efecto de llevar a cabo ese estudio, se hace necesario realizar una breve reseña de los hechos denunciados.

Del acta de comparecencia de veintisiete de abril de dos mil quince (fojas de la 1 a la 3), se desprende que la quejosa, _____, señaló, en la parte que interesa, lo siguiente:

1. Que desde dos mil once, se desempeña como adscrita a la _____, la cual se ubica en la puerta _____ de la planta baja del edificio sede de este Alto Tribunal.
2. Que un martes o miércoles de agosto de dos mil catorce, sin poder precisar la fecha exacta, cuando salía del área de servicios médicos y se disponía a ir a comer, la abordó _____ (sic.)¹⁷, quien le entregó una nota doblada, la cual tomó y siguió caminando.



¹⁷ El nombre correcto del servidor público denunciado es:



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

P.R.A. 16/2015 ^{ay}
FORMA A

3. Que al salir del edificio sede del Alto Tribunal, abrió la nota, comenzó a leerla y advirtió que su contenido era el siguiente:

4. Que al leer las primeras líneas pensó que el servidor público involucrado estaba equivocado, que era una tontería y que ella no había dado motivo para que él pensara eso. Al continuar leyendo la nota, se "puso transparente", le dio "mucha pena", se sintió ofendida y agredida al haber recibido algo "tan grotesco", por lo que rompió la nota y la guardó.

5. Que en su momento no presentó alguna queja, pues pensó que no pasaría "nada" y, si lo hacía, le preocupaba que él se enterara y le reclamara esa situación.

6. Que no recuerda que alguien estuviera presente cuando esta persona le dio la nota.

7. Que el viernes siguiente a tal hecho, vio pasar a _____ (sic.) frente a la puerta del área de _____ y él, al verla, miró su reloj, gesto que ella consideró era para decirle que tenían una cita. Sin embargo, precisa que no asistió a la reunión que le propuso.

8. Que días después de lo sucedido, el servidor público involucrado se presentó al área de _____ con la regularidad con la que lo hacía, actuando como si nada hubiera pasado y, aunque ella lo trataba lo más respetuosamente posible, su actitud hacía él era hostil, como consecuencia de lo ocurrido.

9. Refiere que previamente a que recibiera esa nota, el servidor público involucrado se presentaba con frecuencia al área de _____ y, en esas ocasiones, su trato hacia él siempre fue cordial y amable, se saludaban e, incluso, platicaban del _____ y del _____ y de _____.

10. Que en enero o febrero de dos mil quince, sin precisar el día, _____ (sic.) se presentó en el área de _____ alrededor del mediodía y estando a solas con la quejosa le ofreció una disculpa, reconociendo el error que había cometido y manifestando que el hecho de pensar que ella pudiera sentirse atraída hacia él "le generaba emoción y excitación". Además, le dijo que creía que ella le daba un trato diferente al del resto del personal, le reiteró su disculpa e insistió en que su intención no fue ofenderla y





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

señaló que en su escrito había mencionado que si no deseaba aceptar la propuesta, olvidara el asunto y le diera el trato que le dispensaba a cualquier otro trabajador.

11. Que en respuesta a lo anterior, la quejosa le aclaró que trataba a toda la gente de la misma manera y que a él nunca le otorgó un trato distinto, que lo que había escrito en la nota le parecía contrario a lo que en ese momento le manifestaba y que no era un asunto fácil de olvidar. Además, le indicó que no podía disculparlo, pues se sintió ofendida con la nota.

12. Que desde el día en que se disculpó, no lo ha vuelto a ver ni dentro del área de ni fuera de ahí.

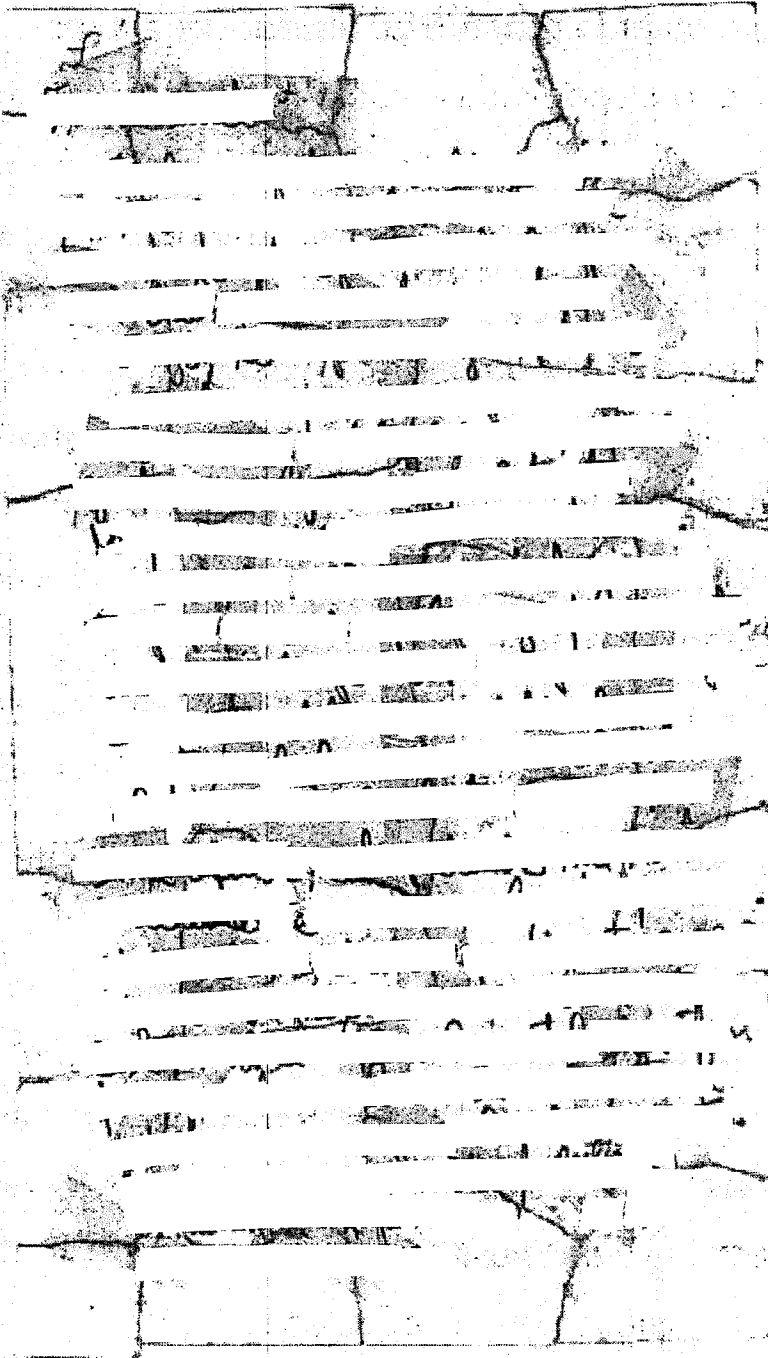
13. Que considera que situaciones como la que vivió vulneran a las personas y las hacen sentir que hicieron algo inadecuado, aunque no haya sido así, puesto que no es posible que se confunda un trato amable con insinuaciones sexuales.

En apoyo a sus manifestaciones vertidas en la comparecencia de mérito,

presentó el original de la nota aludida, la cual se encuentra elaborada de forma manuscrita por

, con lápiz y se encuentra fragmentada porque, según afirma la quejosa, la rompió una vez que la leyó por el desconcierto que le provocó, sin embargo, después la unió con cinta adhesiva. La imagen de esa nota se inserta a continuación para mejor referencia:

P.R.A. 16/2015





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

P.R.A. 16/2015 ^{as}
FORMA A



Por su parte, el servidor público involucrado, al rendir su informe de defensas, manifestó respecto de los hechos antes relatados lo siguiente:

1. Negó todos y cada uno de los hechos que le atribuyó la quejosa.
2. Indicó que conoce a la quejosa porque ha asistido al área del de este Alto Tribunal a recibir atención.

P.R.A. 16/2015

3. Reconoció que la letra de la nota es suya, aunque señala que ésta no estaba dirigida a la quejosa, sino "a una . . . que no es ella".

4. Afirmó que la nota (en la que se hace una propuesta de índole sexual con un lenguaje soez) la rompió él mismo y, posteriormente, la tiró en el cesto de basura que se encuentra, precisamente, en el área del . . . del edificio sede de este Alto Tribunal.

Cabe mencionar que el servidor público involucrado no aportó ningún elemento de prueba que acreditara estas afirmaciones.

Atendiendo a la naturaleza de los hechos controvertidos, la valoración de las probanzas en el presente caso, busca determinar si existen elementos probatorios sólidos en relación con los hechos que se pretenden conocer que permitan demostrar cuál de las versiones que sobre ellos se encuentran contrapuestas entre sí (esto es: entre la afirmada por la quejosa y la vertida por el imputado) está sustentada en medios de convicción que concluyan la veracidad de tales hechos.

Ahora bien, de autos se desprende, en primer lugar, que el servidor público, efectivamente, conoce a la quejosa porque, según afirma, ha asistido en diversas ocasiones al área del . . . para que se le brinde atención.

Asimismo, de las constancias del expediente se puede observar la existencia de la documental consistente en la nota que, según alega la quejosa, le fue entregada por el



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

servidor público involucrado en u propia mano, en virtud de la cual se hace una propuesta de índole sexual con un lenguaje soez. Dicho documento fue exhibido por la propia quejosa en el presente procedimiento al momento de formular su denuncia. Es importante mencionar que, pese a que el servidor público involucrado negó todos los hechos que se le reprochaban, reconoce expresamente que la letra de la nota es de él, esto es, que la elaboró personalmente. Ese reconocimiento sobre la letra que se observa en la nota no sólo implica que el servidor público acepte haberla escrito, sino que con ello, al mismo tiempo, admite que el texto asentado en el documento lo elaboró él. Es decir, existe una confesión implícita de que el lenguaje utilizado en la nota fue formulado por él, así como que la propuesta de índole sexual también fue expresada por su autor. En este sentido, la documental referida, conjuntamente con su confesión y reconocimiento de haberla elaborado, hacen prueba plena que el servidor público sí escribió esa carta y que en ella realizó una invitación de carácter sexual.

Ahora bien, una vez demostrado que la nota es verídica y que ésta fue elaborada por el servidor público involucrado, es necesario determinar cómo es que dicha nota llegó al poder de la quejosa, es decir: si como ella lo sostiene: la nota le fue entregada directamente en su mano por el imputado, o bien, si como lo sostiene éste último: la nota la rompió y la tiró en el cesto de basura del área de _____, lo que implicaría que la quejosa la haya recogido para presentarla como prueba en el presente procedimiento.

P.R.A. 16/2015

En este sentido, es importante señalar que para la búsqueda de la verdad de los hechos, el juzgador no puede limitarse a analizar sólo las pruebas directas que obren en el expediente. Por el contrario, tiene la obligación de concatenar todos los hechos conocidos y demostrados, conjuntamente con aquellas pruebas indirectas o indiciarias que existan, para con ello poder obtener aquellos hechos que se buscan y se desconocen, que permitan tener todo el panorama de lo que verdaderamente aconteció.

Sobre este punto es menester referir que cuando se trata de hechos de contenido sexual, como en el caso que nos ocupa, su comisión generalmente se realiza en ausencia de testigos. Por ello, resulta muy difícil acreditar algunos aspectos con pruebas directas, pero eso no implica que no se puedan tener por demostrados mediante pruebas indirectas.

Pues bien, en el presente caso se parte del hecho conocido de que, efectivamente, el servidor público involucrado escribió una nota en la que se hace una propuesta de índole sexual. Por su parte, la quejosa, , declaró, bajo protesta de decir verdad, que fue el que le entregó en propia mano la nota manuscrita a lápiz que presentó ante esta Contraloría, cuando ella salió del área del para ir a comer. A decir de ella, no hubo testigos que presenciaron el momento en el que el servidor público involucrado le entregó la nota antes referida. Sin embargo, es una realidad que quién tenía en su poder la nota era ella, pues fue precisamente la que





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN



exhibió esa documental en el presente procedimiento al momento de formular su denuncia, lo que hace presumir que el denunciado fue quien se la entregó, presunción que no fue desvirtuada por ningún medio de convicción por el servidor público involucrado, pues éste únicamente se limitó a mencionar que estuvo en el área del

en donde el mismo destruyó la nota y la tiró en el cesto de basura de ese lugar. Cabe mencionar que esta versión resulta inverosímil, pues implicaría que la quejosa hubiese tomado del cesto de basura la nota y la hubiese pegado para presentarla en su denuncia, lo cual es poco creíble. Por el contrario, esta afirmación del imputado, lejos de desvirtuar lo expresado por la quejosa, confirma que efectivamente estuvo en el mismo lugar físico en donde labora la afectada, conjuntamente con la nota en la que hizo la propuesta.

En ese orden de consideraciones, en uso del arbitrio para apreciar y resolver los procedimientos disciplinarios relacionados con esos hechos, de conformidad con los artículos 197 y 218 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se otorga valor probatorio preponderante a la declaración de

en virtud de que sus manifestaciones resultan congruentes entre sí, lo que genera convicción al respecto.

Además, en autos no obran pruebas que contradigan lo manifestado por respecto de los hechos materia del presente procedimiento de responsabilidad administrativa. Por el contrario, existe un reconocimiento del propio servidor público involucrado en

el sentido de que efectivamente conoce a la quejosa, pues asiste asiduamente al ... También existe un reconocimiento expreso de que él elaboró la nota con su puño y letra, lo que implica que también reconoce su contenido, el lenguaje que utiliza y la propuesta que se formula. Asimismo, reconoce haber estado con la nota en el área del ... en donde, precisamente, labora la quejosa, pues según afirmó ahí fue donde él rompió la nota y la tiró a la basura en ese lugar. Por otra parte, existe la certeza de que quién tenía la nota en su poder era precisamente la quejosa, pues ella fue la que la exhibió en el presente procedimiento.

Por todo ello, pese a no existir pruebas directas, como sería el caso de una testimonial, de los demás medios de convicción antes relatados, sí se puede llegar a la conclusión de que el servidor público involucrado, quien elaboró una nota con una propuesta de índole sexual, utilizando un lenguaje soez, y quien estuvo presente en el lugar donde labora la propia quejosa, le entregó dicha nota en su propia mano.

Cabe mencionar que la anterior conclusión no se ve desvirtuada por la manifestación del imputado en su informe de defensas, en la cual señala que, si bien la nota la escribió él, no iba dirigida a la quejosa, sino a "una ... que no es ella". Tal aseveración carece de sustento adicional que la corrobore. De hecho, de su contenido sólo se aprecia un argumento que busca evadir la realidad del hecho, pues maliciosamente pretende señalar que la destinataria no era la quejosa, pero no





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

indica ni acredita quién, en su caso, era la persona a la que se dirigía.

Por todo lo anterior, se puede concluir que el servidor público involucrado escribió de su puño y letra una nota en la que se hace una propuesta de carácter sexual, usando un lenguaje por demás vulgar. Dicha nota se la entregó a la quejosa cuando ésta se dirigía a comer, dentro de las instalaciones de este Alto Tribunal, lo que se corrobora con el hecho de que fue la propia quejosa la que tenía en su poder la nota y la exhibió al momento de formular su denuncia.

Pues bien, de los datos revelados se pueden tener por acreditados los hechos que sirven de base a la imputación formulada en contra del servidor público involucrado y, como consecuencia de ello, tener por acreditada la infracción cometida por éste. Lo anterior, porque se demostró que el servidor público le entregó una nota a la quejosa dentro de las instalaciones de este Alto Tribunal, en virtud de la cual, con un lenguaje soez, le hace una propuesta de índole sexual.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Por lo tanto, en el presente caso, los hechos imputados al servidor público involucrado se tienen por demostrados, en virtud de la ilación lógica de las pruebas que obran en autos.

Ahora bien, si se trasladan los hechos que se tuvieron por acreditados a la premisa normativa analizada al inicio de este considerando, se obtiene que la conducta reprochada al servidor público involucrado configura la

infracción que se le imputa. Las expresiones escritas, que dirigió a

, no son propias de un cumplido¹⁹, ni constituyen una forma de atención sexual²⁰, cortejo o invitación²¹ que se enmarquen en el ámbito del respeto con el que deben conducirse los servidores públicos en su centro de trabajo y en horario de labores, ya que no se limita a expresar halagos hacia dicha servidora pública, sino que utiliza frases de contenido sexual explícito como " " y "

frase esta última que al dirigirse a una de las zonas íntimas del cuerpo de una mujer y en un contexto en el que la quejosa refirió no haber dado su consentimiento para ese comportamiento, resultan violentas y ofensivas a su intimidad y, por tanto, configuran una falta de respeto.

Con su actuar, el servidor público involucrado dejó de cumplir con su deber de ser cortés y cordial, así como dejó de dispensar un trato digno a las personas con las que se relaciona con motivo de su empleo, en el caso particular a quien le brindaba una atención en el área del

¹⁹ El cumplido es una forma de acercamiento a las personas, "constituye una estrategia de cortesía positiva que expresa solidaridad y aprecio y contribuye a hacer más amables y armoniosas las relaciones humanas. Cfr. Barros García, María de Jesús, "Cumplidos y ofrecimientos: actividades de cortesía valorizadora en la conversación coloquial española", en Escamilla Morales, Julio (ed.), *Miradas multidisciplinares a los fenómenos de cortesía y descortesía en el mundo hispánico*, Universidad del Atlántico-Universidad de Estocolmo, 2012, p. 112.

²⁰ La atención sexual es un comportamiento o una serie de comportamientos amistosos, de contenido sexual cuya característica es que son aceptados y mutuos entre las personas involucradas. Sobre este aspecto, es oportuno referir que la Comisión de las Comunidades Europeas en el anexo relativo a la Recomendación de veintisiete de noviembre de mil novecientos noventa y uno, sobre la "Protección de la dignidad de la mujer y del hombre en el Trabajo" (92/131/CEE), publicada en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, enfatizó "la atención sexual se convierte en acoso sexual si continúa una vez que la persona objeto de la misma ha indicado claramente que la considera ofensiva, si bien un único incidente de acoso puede constituir acoso sexual si es lo suficientemente grave. Lo que distingue el acoso sexual del comportamiento amistoso es que el primero es indeseado y el segundo aceptado y mutuo", p. 4.

²¹ La invitación constituye un ofrecimiento en el que una persona propone a para que acepte algo de ella. Cfr. Escamilla Morales, Julio (ed.), *Miradas multidisciplinares a los fenómenos de cortesía y descortesía en el mundo hispánico*, op. cit., p. 123 y ss.





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN



..., al cual acudía en su carácter de servidor público. Además, omitió respetar los derechos y libertades de la quejosa, a quien se dirigió con expresiones agresivas, particularmente vulgares, que atentaron contra su dignidad personal, al hacerle una propuesta de índole sexual.

Un comportamiento de esta naturaleza por parte de un servidor público de este Alto Tribunal, evidentemente, resulta inaceptable, pues no sólo es irrespetuoso y soez, sino que, además, implica un tipo de violencia contra la mujer²² que no se puede tolerar y, por el contrario, se debe erradicar como parte de la obligación del Estado a garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia²³. Ello, porque su conducta generó en la quejosa un estado emocional que le provocó incertidumbre y desconcierto, la hizo sentirse vulnerable ante la situación que vivía, respecto de la cual no sabía cómo reaccionar.

En consecuencia, ante el incumplimiento hasta aquí revelado, se estima acreditada la causa de responsabilidad imputada, prevista en el artículo 131, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 8, fracción VI, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, por lo que el servidor público involucrado es plenamente responsable de su comisión.

²² De conformidad con el artículo 5, fracción IV, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se entiende por violencia contra las mujeres: "Cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público".

²³ El artículo 19 de la ley antes mencionada indica:

"Artículo 19. Los tres órdenes de gobierno, a través de los cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, tienen la obligación de organizar el aparato gubernamental de manera tal que sean capaces de asegurar, en el ejercicio de sus funciones, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia".

TERCERO. Sanción. Al haber quedado demostrada la infracción administrativa atribuida al servidor público de mérito, se procede a individualizar la sanción que le corresponde, acorde con lo dispuesto en los artículos 136 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 14 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en relación con los artículos 45 y 46 del Acuerdo General Plenario 9/2005, en los siguientes términos:

a) Gravedad de la infracción. La conducta atribuida al infractor no está expresamente tipificada como grave, toda vez que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 131, fracciones I a VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación ni 13, antepenúltimo párrafo, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

No obstante lo anterior, sí existen diversos elementos que provocan que resulte necesario imponer una sanción más severa al infractor. En particular por los siguientes aspectos:

En primer término, resulta necesario aumentar la sanción derivado de la magnitud de las consecuencias que acarrea la conducta del servidor público responsable. Ello, porque su actuar generó un acto de violencia contra la mujer, pues restringió sus libertades, violentó su derecho a una vida libre de violencia, le provocó una afectación a su estado emocional y atentó contra su





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN



dignidad humana con motivo de la propuesta de índole sexual que le formuló, utilizando un lenguaje soez.

Cabe mencionar incluso, que para combatir estos actos, se ha expedido una ley especial²⁴, que impone a los diversos órganos del Estado la obligación de garantizar el ejercicio efectivo de las mujeres al derecho referido. Es decir, en términos de esa norma, las autoridades deben de generar las condiciones que inhiban aquellas conductas que causen un daño o sufrimiento psicológico, físico o sexual a la mujer, basado en su género.

En este sentido también debe señalarse que el propio Estado mexicano, al suscribir y ratificar la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la Mujer, conocida como "*Convención De Belém Do Pará*", se obligó a procurar el ejercicio efectivo del derecho de la mujer a una vida libre de violencia, lo que implica tratar de evitar las condiciones que provoquen la violencia psicológica o sexual en contra de la mujer. En virtud de ello, al considerarse que la conducta del servidor público infractor que se tuvo por acreditada implica, al mismo tiempo que una omisión de conducirse con respeto, un acto de violencia contra la quejosa, es evidente que este tipo de actos deben sancionarse de manera más severa con el fin de establecer las condiciones que permitan erradicarlos, sobre todo si ellos se dan en el seno del Máximo Tribunal del país.

²⁴ La norma referida se trata de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

En segundo lugar, resulta necesario imponer una sanción más contundente por la conveniencia de suprimir este tipo de actitudes en el ámbito de este Alto Tribunal que atentan contra la dignidad de las mujeres que laboran en él. Esto, por sí mismo, justifica el incremento en la sanción que se le imponga al servidor público responsable.

b) Nivel jerárquico y antigüedad en el servicio.

De las constancias del expediente personal del infractor se desprende que el servidor público ingresó a laborar en este Alto Tribunal el primero de junio de mil novecientos setenta y cinco, con el cargo de oficial judicial (foja 920 del expediente principal) y a la fecha en que ocurrieron los hechos materia del presente procedimiento desempeñaba el cargo de Profesional Operativo, Rango A, puesto de confianza, adscrito a la Secretaría General de Acuerdos, con efectos a partir del uno de abril de dos mil trece (foja 66 del expediente principal), con una antigüedad en el servicio de treinta y tres años, ocho meses y cuatro días, al día treinta de septiembre de dos mil quince (foja 920).

c) Circunstancias socioeconómicas. No es necesario analizarlas, puesto que en este caso no se impondrá sanción pecuniaria.

d) Condiciones exteriores y los medios de ejecución. En este aspecto se tiene que el incumplimiento derivó en la ausencia de buena conducta al tratar de manera irrespetuosa a las personas con las que tuvo relación con motivo de su empleo,



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

particularmente, por haber entregado a la quejosa una nota escrita por su puño y letra, dentro de las instalaciones de este Alto Tribunal, en virtud de la cual, con un lenguaje soez, le hace una propuesta de índole sexual.

Cabe mencionar que la conducta desarrollada por el servidor público responsable fue realizada sin que la quejosa hubiera dado pie a que se le hiciera la propuesta que éste le formuló. Aunado a ello, el infractor, al realizar el acto de entrega, trató de ocultarse para no evidenciar ante terceros su proceder. Asimismo, es indudable que el servidor público, al rendir su informe de defensas, pretendió ocultar la verdad de los hechos y manipular su versión de estos, ya que buscó engañar a este Alto Tribunal con afirmaciones con las que negaba que la nota se dirigiera a la quejosa, sino a "una fina damita", sin indicar el nombre de la persona que supuestamente era la destinataria.

No obstante, con el reconocimiento de que la letra de la nota es de él, entre otros elementos, también acepta la utilización del lenguaje que en ella se contiene y la formulación de la propuesta de índole sexual a la quejosa que por medio de ésta se realiza, lo que evidencia la gravedad en la exteriorización de su conducta. Además, con dicho reconocimiento queda evidenciado que su comportamiento es propenso a generar violencia contra la mujer por la manera en que se expresa y el vocabulario que utiliza. Por ello, resulta necesario imponer una pena más severa que, en su caso, inhiba su intención de

P.R.A. 16/2015

cometer nuevamente este tipo de conductas que afecten a las servidoras públicas de este Alto Tribunal.

e) Reincidencia. Del registro de servidores públicos sancionados no se advierte que el servidor público involucrado haya sido sancionado con motivo de alguna falta administrativa previa, según constancia de diez de diciembre de dos mil quince que emitió la Subdirectora General de Responsabilidades Administrativas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (foja 923 del expediente principal).

f) Monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del incumplimiento de obligaciones. En la especie no existe prueba de que el infractor hubiera obtenido algún beneficio o lucro indebido, ni ocasionado daño o perjuicio económico a este Alto Tribunal con motivo de la infracción en que incurrió.

En mérito de las consideraciones que anteceden, particularmente las relativas a los antecedentes y gravedad de la conducta del responsable, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 14, fracciones VII y XXIII; 133, fracción II; 135, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 14 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; 45, fracción IV, y 46 del Acuerdo Plenario 9/2005; esta Presidencia estima que se debe imponer al infractor la sanción consistente en **suspensión del cargo por quince días**, que se ejecutará en términos de lo establecido en el artículo 48, fracción III, del Acuerdo General Plenario 9/2005.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Asimismo, deberá remitirse copia certificada de la presente resolución a la Dirección General de Recursos Humanos e Innovación Administrativa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a efecto de que sea agregada al expediente personal del servidor público.

Es importante mencionar que para la ejecución de la sanción que impone, se deberán tomar las medidas pertinentes para salvaguardar los datos sensibles que pudieran poner en riesgo la integridad física y psicológica de la afectada, en los términos que la legislación en materia de transparencia y protección de datos personales lo disponga.

Por lo expuesto y fundado se resuelve:

PRIMERO. Se acredita la causa de responsabilidad materia del procedimiento, atribuida a _____, en el cargo de profesional operativo, adscrito a la Secretaría General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

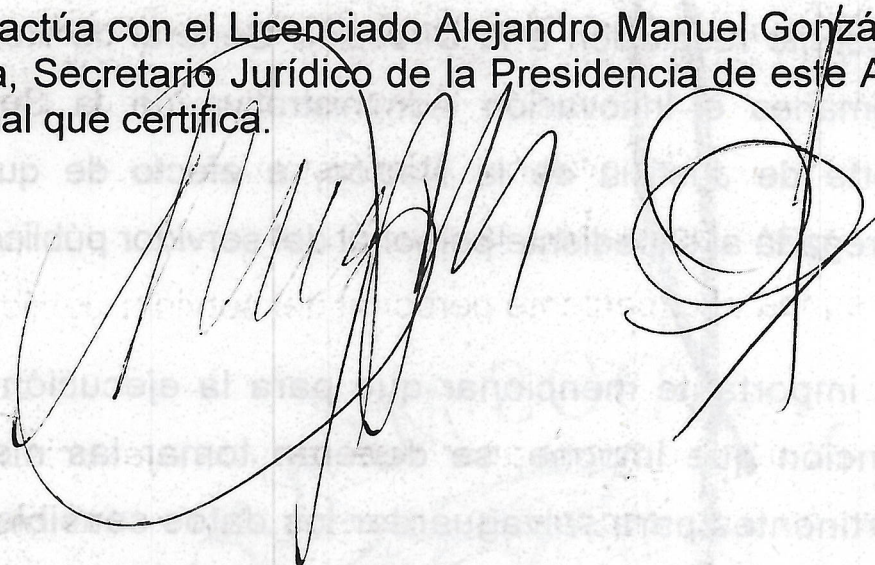
SEGUNDO. Se impone al servidor público mencionado la sanción consistente en **suspensión del cargo por quince días.**

Devuélvase el expediente a la Contraloría de este Alto Tribunal para los efectos legales a que haya lugar y, en su oportunidad, archívese como asunto totalmente concluido.

Así lo resolvió el Ministro Luis María Aguilar Morales, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,

P.R.A. 16/2015

quien actúa con el Licenciado Alejandro Manuel González García, Secretario Jurídico de la Presidencia de este Alto Tribunal que certifica.

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and flourishes.

Esta hoja corresponde al Procedimiento de Responsabilidad administrativa 16/2015.